

América Latina en la era Trump

Latinoamérica, que ha sufrido el populismo quizá más que nadie, observa con inquietud los primeros pasos y gestos de desprecio que le dirige desde la Casa Blanca Donald Trump. ¿Cómo puede afectar la irrupción de un presidente aislacionista al equilibrio regional y por tanto al mundial? El profesor de ciencia política Salvador Martí ha coordinado este trasfondo con aportaciones de colegas de Ecuador, México, Argentina, Oxford, Girona y Salamanca que nos dan puntos de vista, datos, reflexiones y pistas para entender mejor nuestro (cada vez más) pequeño mundo.

¿Qué se puede esperar?

Salvador Martí i Puig

MIEMBRO DEL INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA

La inesperada llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha generado múltiples incógnitas sobre cuál puede ser la política norteamericana respecto de América Latina. Esto es así debido a que en la campaña electoral el entonces candidato desarrolló un discurso nacionalista y xenófobo, y sólo se refirió a la región a través de dos temas trufados de prejuicios, a saber, la deportación de los latinos sin papeles y la construcción de un muro en la frontera con México.

A pocos meses de su llegada al poder aún no hay demasiada claridad sobre cuál será la relación entre EE UU y sus vecinos del sur, pero ya hay indicios de por dónde puede ir. Sin embargo, antes de empezar es preciso señalar que tanto la política de deportaciones como la de la construcción del muro no son novedad: desde 1994 hasta hoy los EE UU ya ha construido más de 1.050 km de valla en la frontera, y la administración Obama ya realizó cerca de unos tres millones de deportaciones, casi la mitad de personas sin ningún antecedente penal.

Con todo, parece que la administración Trump tiene una voluntad más explícita e intensa respecto a los dos temas arriba citados, a la vez que muestra algunas tendencias en otras dos cuestiones más: su forma de relacionarse con los regímenes políticos de la región, y la de defender los intereses

Desde 1994 hasta hoy, EE. UU. ya ha construido más de 1.500 km de valla en la frontera con México

económicos norteamericanos. En este texto vamos a señalar de forma muy breve la posición de la nueva administración en estos cuatro temas.

El primero se refiere a la política de deportaciones, que se ha consolidado después del decreto migratorio firmado el 25 de enero de 2017 que amplía el abanico de personas que pueden ser detenidas y da más poder

a los agentes para detener indiscriminadamente a personas no nacionales. Esto ha generado mucho miedo entre la comunidad latina hasta el punto de que algunas familias han empezado a desescolarizar a sus hijos y muchos trabajadores han dejado su empleo.

El segundo tema es el de la construcción del muro que, si bien parcialmente ya existe, está generando una mayor vulnerabilidad de los inmigrantes que deben buscar pasos más remotos y arriesgados para llegar a territorio norteamericano, y pagar más a las mafias que controlan el paso ilegal de personas. A la vez se ha dado alas a la criminalización de los inmigrantes y más impunidad a los paramilitares que los “cazan” en la zona fronteriza.

El tercer tema es la política de no injerencia en los temas de derechos humanos de los regímenes de la región y la dejación de criterios normativos a la hora de relacionarse con ellos. Parece que Trump continúa la política hacia América Latina iniciada con George W. Bush que prioriza la relación con los países latinoamericanos según su

proximidad geográfica. Washington mantiene un gran interés por controlar lo que acontece en su frontera meridional y en el Gran Caribe, interés que se atenúa al llegar al mundo andino y disminuye aún más respecto al Brasil y el Cono Sur. Sin duda este retraimiento de la administración estadounidense hacia los gobiernos latinoamericanos coincide con el viraje de muchos de ellos hacia una posición de derecha pro-liberal, con una crisis de los procesos de integración de corte latinoamericanista (ALBA y Mercosur), y con la quiebra del régimen venezolano. En este sentido puede presumirse que la relación bilateral entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos será poco convulsa en el próximo lustro. Las dos incógnitas son el caso de México, donde no se sabe si el discurso xenófobo de Trump dará alas a la candidatura izquierdista y nacionalista de López Obrador o no; y el caso de Cuba, donde no queda claro si la voluntad de revertir las iniciativas de Obama van a congelar la situación existente o significará un apoyo explícito a las iniciativas opositoras.

El cuarto y último tema es la relación contradictoria de la administración Trump respecto al mundo de la empresa, en la que combina una lógica proteccionista que jalea a que empresas norteamericanas se relocalicen en los Estados Unidos y abandonen los países latinoamericanos, con políticas de apoyo hacia las grandes corporaciones extractivas (mineras, petroleras, forestales) que tienen un nocivo impacto social y medioambiental. En cualquier caso parece que el ímpetu de liberalización comercial que impulsó los Estados Unidos desde los años noventa en todo el hemisferio está llegando a su fin.

Finalmente cabe pensar si en esta nueva coyuntura otras potencias alternativas van a penetrar en una región que históricamente se ha visto como un espacio geopolítico reservado a los Estados Unidos. ▀

La familia primero

Felipe Burbano de Lara

INVESTIGADOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES DE QUITO (ECUADOR) Y PERIODISTA

La imagen política de Donald Trump en América Latina es una extraña combinación entre la familiaridad hacia los *outsiders* políticos y la distancia y la antipatía que despierta un empresario que encarna algunos de los peores valores de la supremacía capitalista norteamericana.

Si se puede hablar de una cierta familiaridad, a pesar de las diferencias abismales de contexto, se debe a esa fuerza disruptiva de los populismos con su promesa de devolverle el poder al pueblo y castigar a una clase política acusada de corrupta, tan habitual en la historia política de América Latina. Los países latinoamericanos configuraron su modernidad política y sus categorías de identidad colectiva enmarcadas en una cultura populista heredada de los caudillismos del siglo XIX y que se actualiza con sorprendente continuidad hasta el siglo XXI mediante sucesivos oleajes. Común a esa cultura política son las promesas redentoras, los discursos maniqueos de buenos y malos, el personalismo exacerbado, con su pretensión de encarnar lo más auténtico de las culturas populares y sus aspiraciones inmediatas.

Trump representa algo que ha sido frecuente en la historia de América Latina: impugnar las tradiciones liberales asociadas a las instituciones democráticas. El populismo implica siempre desplazar el lazo político de las instituciones representativas a la capacidad del líder para establecer un vínculo directo con sus seguidores. Como han mostrado los teóricos del populismo, las campañas electorales se transforman en momentos carismáticos para construir un vínculo plebiscitario que luego se reproduce en el ejercicio del gobierno. Sabemos que ese vínculo transfiere

toda la responsabilidad política al líder por encima incluso de las instituciones y las tradiciones, bajo la condición de cristalizar sus promesas.

La familiaridad de América Latina con Trump viene de muchas facetas propias de los populismos. En ellos, la legitimidad y dinámica del juego político entre el líder y sus seguidores depende de la capacidad del primero de sostener los desafíos y transgresiones en contra del *establishment*, y de ahí viene su arbitrariedad e impredecibilidad. En el caso de Trump, los desafíos a lo políticamente correcto, a los con-

EE. UU. pueden mirar a Latinoamérica si quieren saber qué les puede costar el populismo de Trump

vencionalismos de las relaciones internacionales, a los acuerdos globales, a su promesa de construir un refugio nacional seguro con el levantamiento de un muro que los mantenga a buen recaudo de las indeseables olas migratorias del sur. Si los populismos latinoamericanos se alimentan de las tradiciones caudillistas, en la cultura contemporánea norteamericana parecen inspirarse en los superhéroes salidos de las tiras de Marvel: Spider Man, Captain America, Hulk, Iron Man... A todo lo anterior se une otro rasgo populista conocido para los latinoamericanos: la centralidad de los intereses familiares. Como reportaba la revista *Time* en su número de junio 5 a propósito del influyente rol del yerno y la hija de Trump en el gobierno: "La familia primero".

EL Señor del Caballito



Carlos de la Torre, profesor de la Universidad de Kentucky, ha sugerido en varios artículos que los norteamericanos deberían conocer las experiencias de América Latina para entender lo que les puede pasar con Trump. Una elegante forma de sugerir que América Latina también puede ser un espejo donde mirarse. La imagen que lanza de la Torre resulta muy poderosa: si Estados Unidos se presentó desde los 80 como el poder que desde sus principios liberales tutelaba la democracia latinoamericana, ahora debe mirar la experiencia latinoamericana para entender qué les está pasando y saber qué significa la hegemonía populista. De la Torre ha comparado el liderazgo, las promesas, el mesianismo y la lógica antagónica de Trump –no sus contenidos por supuesto– con la figura de Hugo Chávez. El ejercicio que se propone es tan osado como pertinente: reírse de esa visión que consideraba a los populismos como expresión de atraso político y subdesarrollo económico y social. Nos resulta tan familiar la fanfarronería populista de Trump que no cabe sino reírse un poco de esta inversión histórica de la relación de los norteamericanos con la democracia.

Pero no todos los populismos tienen los mismos contenidos y orientaciones. Los contextos los diferencian y especifican. Para los latinoamericanos Trump resulta un yanqui de la peor especie, un cowboy del siglo XXI, reaccionario, ignorante, producto del capitalismo, de su mundo corporativo, de la arrogancia que concede el dinero y de la pretensión de la élite blanca por sostener la supremacía étnica por encima de los despreciables inmigrantes latinos. Trump es un nacionalista prepotente, la expresión más acabada de la fusión entre el Estado y las grandes corporaciones. Lo confirman las donaciones de las corporaciones –Ford, Boeing, Pfizer, Google, Microsoft, Coca Cola, Fedex, Wall Mart, Samsung, Exxon, BP, Citgo, GM, ATT, Exxon– a la ceremonia de toma de posesión. Trump recolectó para ese día 107 millones de dólares, el doble que Obama para su segunda posesión. Lo que suena escandaloso en una democracia ahora se transforma en una señal del poderío de un estado capitalista dispuesto a encerrarse dentro de sus fronteras para reconstruir su liderazgo mundial.

En este aislamiento norteamericano que reconstruye Trump, América Latina se sitúa por fuera de sus intereses económicos. Y desde sus horizontes culturales e identitarios, la región queda como una incómoda puerta trasera, a la que se debe dar el portazo final. ▀

La salud de la democracia en América Latina

Manuel Alcántara Sáez

CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Aunque hablar de América Latina en términos generales es siempre arriesgado dada la heterogeneidad de la región cuando se hace en clave política hay tres indicadores que son compartidos por la práctica totalidad de los países que la integran. En primer lugar, los países que se reconocen bajo la denominación de latinoamericanos accedieron a la independencia prácticamente de manera simultánea (las excepciones diferidas son Cuba y Panamá) y se han mantenido como estados independientes hasta la actualidad, algo que no se encuentra en otras áreas geográficas. En segundo término proceden de un tronco inmediato común definido por la presencia colonial de España y Portugal. Finalmente, se han movido bajo el imperio del constitucionalismo liberal, cuando no estuvieron dominados por gobiernos autoritarios de distinto porte, habiendo adoptado el presidencialismo de manera generalizada.

Este último aspecto ha sido particularmente importante desde hace cuatro décadas en que los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba, transitaban desde gobiernos autoritarios a la democracia en una década (1978-1989). A partir de entonces los gobiernos han seguido las pautas de la poliarquía, de modo que las crisis que han ido aconteciendo de diferente naturaleza se han ido superando mediante mecanismos institucionales que consiguieron reconducir los pro-

cesos. Así, se mantuvo la elección de los gobernantes a través de elecciones razonablemente libres, competitivas y limpias que produjeron la alternancia gobierno-oposición. De igual modo, funcionaron mecanismos de control fruto de la división de poderes y las instituciones derivadas del estado de derecho han venido actuando creando un margen relativo para el desarrollo de la ciudadanía.

El accionar de la política a lo largo de las últimas cuatro décadas ha estado no obstante imbuido por dos tipos de condicionantes que deben tenerse en cuenta. El primero tiene que ver con las diferencias individuales existentes entre países en lo relativo al funcionamiento de sus regímenes políticos en estrictos términos procedimentales y a la satisfacción de la ciudadanía con relación a la resolución de sus problemas. Ello ha dado pie a una gama de estudios en torno al concepto de calidad de la democracia o de la política. Los mismos ponen de relieve que la región da cabida a cuatro grupos de países que tienen un comportamiento muy diferente en este ámbito. El primero lo integran los países de mayor calidad democrática: Chile, Uruguay y Costa Rica; un grupo intermedio de países con calidad media-alta lo conforman Argentina, Panamá y Perú; en el tercer grupo de calidad media-baja se encuentran Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, República



Dominicana; y, finalmente, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela y Cuba son los países de peor calidad.

Pero el segundo tipo de condicionante que debe considerarse es el hecho de que la región desde la época transicional hasta la actualidad ha pasado por tres tipos de ciclos políticos de cariz distinto que hablan de una especie de comportamiento regional “en sintonía”. Al periodo de transición a la democracia, donde en gran medida se mantuvo el esquema tradicional estado-céntrico, le siguió el ciclo neoliberal de la década de 1990, que se vio reemplazado al iniciarse el nuevo siglo con el denominado del neopopulismo bolivariano o del “giro a la izquierda” y que ahora está siendo reemplazado por un nuevo ciclo tras el fallecimiento de Hugo Chávez y el triunfo electoral de Mauricio Macri dos años más tarde.

Este escenario lleva a plantear que la salud de la democracia en América Latina pasa por abordar dos tipos de problemas de naturaleza distinta pre-

Dos grandes retos: cómo vivir en el mundo global y cómo frenar la corrupción y la desigualdad

sentes en todos los países que, sin embargo, están ligados. El primero se refiere a cuestiones de naturaleza estrictamente nacional y que tienen que ver con la crisis de representación y el desapego de la gente por la corrupción rampante de la clase política y por las nuevas formas de intermediación en sociedades líquidas que han perdido identidades políticas antes bien asentadas; también, con los altos niveles de desigualdad social que se mantienen así como el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana. Estos dos últimos aspectos tienen que ver con un aparato estatal muy precario fruto de una política fiscal muy laxa.

El segundo tipo de problemas se relaciona con la inserción de América Latina en el mundo y con el impacto que la globalización tiene en ella. Ambos aspectos se ligan profundamente a las posibilidades de crecimiento económico de la región y, por consiguiente, a la ayuda para solventar alguno de los problemas mencionados. La relación con la nueva administración Trump, el legado de las ataduras con China y el replanteamiento de la integración regional son retos fundamentales. ▀



Crecimiento y desigualdad desde la experiencia reciente

Diego Sánchez-Ancochea

PROFESOR DE ECONOMÍA Y DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD

Históricamente América Latina ha tenido que hacer frente a dos problemas económicos graves: la dificultad para encadenar tasas de crecimiento de forma sostenida y la desigualdad en la distribución del crecimiento cuando éste tiene lugar. De acuerdo con el trabajo de Esteban Pérez Caldentey y coautores, por ejemplo, en América Latina los periodos de expansión duran cinco años menos que en Asia del Este y del Pacífico. Más aun, mientras que el crecimiento en países como Corea del Sur ha sido pro-pobre, en América Latina ha tendido siempre a beneficiar a las clases más altas.

El periodo entre 2003 y 2013 hizo pensar a algunos que la región podía haber superado ese maleficio de largo

plazo. El cambio en la geopolítica mundial y la diversificación de relaciones comerciales (con China convertida en un cliente fundamental) llevó a algunos a soñar con un periodo extenso de convergencia económica con los países más desarrollados. Más importante aún, la reducción de la desigualdad hizo que se hablara de la emergencia de una América Latina más equitativa. El coeficiente de Gini cayó como media de 0.54 en 2003 a 0.47 en 2012, con una mejora en todos los países menos Costa Rica y Honduras.

Por desgracia, los tres últimos años nos han hecho volver a la realidad. A partir de 2014, el crecimiento económico se desplomó mientras que las mejoras distributivas se estancaron. El coeficiente de Gini ha empezado a

aumentar en varios países a medida que los empleos formales disminuyen y las dificultades fiscales ponen en cuestión la expansión de los programas sociales. Poco a poco se ha extendido una narrativa pesimista según la cual el boom de las materias primas constituyó una nueva oportunidad perdida en América Latina, que fue incapaz de aprovechar condiciones externas favorables para promover el cambio estructural, incrementar el ahorro de largo plazo y erosionar las estructuras socioeconómicas desiguales.

Sin duda, hay mucho de verdad en esta interpretación del desarrollo latinoamericano de los años 2000. No en vano, el peso de los bienes primarios en las exportaciones totales creció significativamente en este periodo (del 40 por ciento en 2004 al 60 por ciento en 2014), la desindustrialización se convirtió en un problema en un número creciente de países y la productividad creció poco. En política social, no se hizo suficiente esfuerzo por corregir los graves problemas de calidad en la prestación de los servicios ni la desigualdad regional, étnica y de género.

No obstante, tampoco deberíamos caer en una retórica derrotista u olvidar algunos cambios significativos que se dieron en la década expansiva.

Primero, sin duda se consolidó a lo largo de la región un enfoque basado en derechos recogidos no sólo en nuevas Constituciones sino también en los debates políticos del día a día.

Segundo, se fueron promoviendo, al menos en el plano de las ideas, nuevas formas de interrelación entre estado y mercado. El rechazo del enfoque neoliberal vino acompañado, en general, del reconocimiento de que una vuelta al estado intervencionista del periodo de sustitución de importaciones no era ni posible ni deseable. Así, por ejemplo, en Bolivia aumentó el peso del estado en la gestión de los recursos naturales sin que ello eliminara el papel de las empresas transnacionales; en Brasil se trató de diseñar nuevas políticas que fomentaran tanto el mercado interno como la expansión regional de muchas empresas; y en casi todos los países se reconoció el doble papel del estado de apoyo del sector privado y promotor de cambios productivos.

Tercero, la competencia electoral se hizo más intensa y exigió una mayor atención a las necesidades de los sectores de menos ingresos. Estos tres cambios contribuyeron a la incorporación de muchos excluidos a nuevos programas no contributivos (ya fuera transferencias condicionadas, pensiones asistenciales o nuevos programas de

salud); a un aumento insuficiente pero significativo de la recaudación fiscal; al reconocimiento de la desigualdad como problema grave; y a una mayor atención—a veces más retórica que práctica—a la política industrial.

Si bien los próximos años serán complicados dada la incertidumbre mundial y la crisis del líder regional (Brasil) se puede seguir avanzando. Para ello, será importante profundizar en los cambios positivos de los últimos años. Los países latinoamericanos deberían fomentar una mayor unificación de los beneficios sociales

entre distintos grupos poblacionales; consolidar el estado de derecho, aprovechando los escándalos de corrupción recientes para impulsar la transparencia; buscar políticas de promoción sectorial más creativas; y promover la participación de distintos grupos sociales en los debates públicos. Todas estas medidas son complicadas pero factibles. Exigen, eso sí, de mucha paciencia: la construcción de economías más dinámicas y diversificadas y de sociedades más justas en América Latina es posible pero llevará tiempo y estará sujeta a continuos altibajos. ▀

Un camino: situar la cultura en la agenda política

Alfons Martinell

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA. EX DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CULTURALES Y CIENTÍFICAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (2004-2008)

La evidente evolución de las sociedades latinoamericanas, en las últimas décadas, no se ha producido solamente en el campo político o económico sino también en la gestión de las políticas culturales. Los efectos de la sociedad de la información, internet, las transferencias de contenidos y las redes sociales han permitido incorporar a las nuevas generaciones con mayor rapidez y con un protagonismo cada vez más activo.

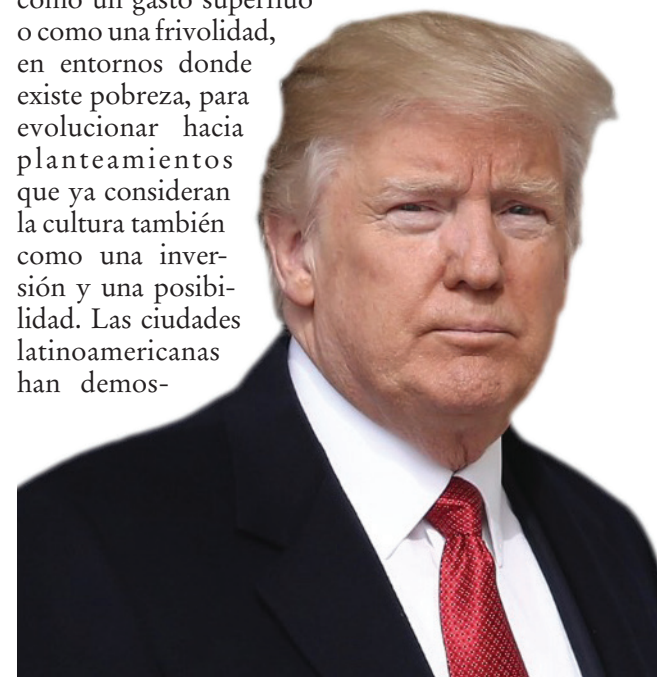
Crear economías más dinámicas y justas llevará tiempo: la cultura es un factor clave del cambio

Hoy se observa un avance moderado en las políticas culturales en el espacio latinoamericano que han roto con una tradición inmovilista de años. Algunos países, en sus cambios constitucionales, han superado el predominio de las construcciones políticas de la cultura nacional y apostado por un reconocimiento de sus realidades multiculturales que está dando lugar a procesos de reparación e inclusión de culturas ancestrales o ignoradas. Aunque este proceso no ha reducido las tensiones habituales con los pueblos indígenas y afrodescendientes, existen avances significativos en su consideración como actores políticos y culturales.

Donde advertimos una evolución más evidente es en la aceptación de

que las políticas culturales no solo han de dedicarse a la identidad nacional, la tradición, el patrimonio y el folklore sino que han de asumir los retos de la modernidad y la globalización. Así, la incorporación de las industrias culturales, el mercado cultural y nuevas prácticas culturales han obligado a cambios importantes en las concepciones clásicas sobre la cultura para asumir que este sector contribuye al crecimiento y al empleo. En este sentido las políticas culturales han incorporado principios de la economía de la cultura y la creatividad (economía naranja) como un elemento fundamental para el crecimiento y en la proyección exterior.

Se produce un tránsito de las concepciones que entienden la cultura como un gasto superfluo o como una frivolidad, en entornos donde existe pobreza, para evolucionar hacia planteamientos que ya consideran la cultura también como una inversión y una posibilidad. Las ciudades latinoamericanas han demos-



trado una gran vitalidad en este sentido y han innovado en muchos casos, convirtiéndose en ejemplos de políticas locales para países con rentas bajas o medias, pero con una gran dosis de innovación, que hoy se valoran a nivel mundial. Las grandes migraciones de las zonas rurales a las urbanas, por pobreza, violencia o abandono, han configurado grandes ciudades en los países latinoamericanos donde la multiculturalidad interna es muy evidente y una prueba de coexistencia y práctica de la interculturalidad.

Pero donde se han producido cambios más espectaculares es en la generación de capital humano preparado para interactuar en las esferas culturales en una sociedad globalizada. La formación de nuevas generaciones en el campo de las artes y la creatividad, la gestión cultural, la producción artística o el diseño, capacitados en las instituciones del país o

en la circulación a nivel internacional ha producido una nueva generación de actores culturales latinoamericanos capaces de actuar en lo local y en lo global con mucha facilidad y rapidez. Esta vitalidad la podemos apreciar en la presencia de creadores, artistas y producciones culturales latinoamericanas en los festivales, circuitos y programaciones de instituciones en todo el mundo.

Esta nueva visión de las políticas culturales latinoamericanas propone una mayor incorporación de sus aportes a los objetivos de desarrollo entendiendo que la lucha contra la pobreza y la exclusión social no se puede conseguir sin la cultura. Y este es el gran cambio de mentalidad que se reclama a las élites dirigentes y políticas para superar una visión caduca de las políticas culturales y entrar en una nueva fase, donde la experiencia latinoamericana tiene mucho que aportar. ▀

como mecanismo principal de relación entre actores. El débil gobierno de Felipe Calderón, producto de una disputada y poco legítima elección, apostó por fortalecerse mediante la declarada “Guerra contra el narcotráfico”. Sin la preparación adecuada y enfocándose en la persecución militar de algunos actores ilegales, lo que se desencadenó fue una *guerra civil económica* –tal como señala el profesor Andreas Schedler– en la que el modelo de creación y distribución de valor se basó cada vez más en los poderes fácticos y su capacidad de administrar la coacción, y menos en la ley. La poliédrica relación con los Estados Unidos, en esta nueva coyuntura, no colaboró para modificar esta dolorosa deriva autoritaria y sangrienta. Por un lado, los millones de refugiados mexicanos en territorio estadounidense (económicos y víctimas del desplazamiento por la violencia) permanecieron en situaciones de mayor vulnerabilidad al quedar fuera de opciones de regularización migratoria que años atrás se llevó a cabo. Por otro lado, las transformaciones hemisféricas del papel mexicano en el tráfico de drogas, personas, armas, se tradujeron en políticas reactivas y selectivas de las autoridades mexicanas y una total des-responsabilización del gobierno estadounidense. Ante ello es preciso cuestionarse: ¿Vale la pena mantener los actuales términos una relación con Estados Unidos, que niega derechos a millones de trabajadores, y que no se hace cargo de su papel consumidor de drogas, vendedor de armas y receptor de incontables volúmenes de valor producto de las guerras civiles en México, Centroamérica y otros países del Sur Global?

3. Una nueva coyuntura electoral abierta. En menos de un año, en junio de 2018, habrá elecciones para elegir autoridades del gobierno federal mexicano y en una buena parte de los estados de la República. Además de las dinámicas y fuerzas endógenas, las fronteras reformuladas por la administración Trump abren la posibilidad de construir opciones políticas amplias, para redefinir el rumbo nacional. En esta coyuntura es posible, por primera vez desde la instauración de elecciones competidas en México, que una plataforma política de centroizquierda pueda hacerse con el poder y, con ello poder mirar de otra forma su relación con el vecino del norte. Una relación corresponsable, multipolar, solidaria y que recupere el papel rector del poder público y profundice el proyecto democrático ahora en regresión. ▀

Trump como oportunidad para el cambio en México

Ernesto Isonza

INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL (XALAPA, MÉXICO)

Una ventaja del todavía reciente terremoto político que ha supuesto la elección de Trump es que pone entre paréntesis una serie de nociones que han guiado la lectura de la realidad geopolítica de México y que se relacionan con los tres temas siguientes.

1. La necesidad de mirar más allá de Norteamérica. Desde 1994, México apostó todas sus cartas políticas y económicas a un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. La promesa a la población por parte del presidente Carlos Salinas de Gortari fue la creación de riqueza en una escala nunca vista y la articulación privilegiada al bloque político-económico más potente del mundo. Tres elementos marcaron la inauguración de esta nueva etapa. Primero, la represión por goteo de la oposición política que puso en jaque la elección de Salinas en 1988: cientos de asesinatos y decenas de desaparecidos. Segundo, la aplicación ortodoxa de las directrices del Consenso de Washington que tuvieron como principales resultados negativos la destrucción del poder adquisitivo de los salarios, la generalización de la informalidad y de la pérdida de derechos sociales, así como el creci-

miento de la desigualdad y la pobreza absoluta. Tercero, la llamada de atención que significó el levantamiento

En 2018, el centroizquierda puede llegar al poder y cambiar la relación con el vecino del norte

zapatista, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero a más de dos décadas de esa opción estratégica y con la llegada de Trump es preciso cuestionarse: ¿Cuáles son las ventajas de un acuerdo como el TLCAN para su México hoy? ¿Es viable todavía la exclusión del libre tránsito de personas en un acuerdo de este tipo? ¿Cabe seguir apostando por un solo gran socio cuando las crisis mundiales de 1995 y 2008 golpearon a la economía mexicana de la manera que lo hicieron?

2. Repensar la violencia política. A partir de 2006 se extendió a todos los niveles una tendencia que tenía una larga tradición: el uso de la violencia

Argentina: ¿una sociedad pendular?

María Laura Tagina

PROFESORA DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Vista desde afuera la sociedad argentina puede parecer pendular. Pasó de aclamar a un gobierno “populista”, a desplazarlo del poder por otro de un signo contrario. Los colegas politólogos podrían interpretarlo como pura alternancia democrática, como un voto de castigo al desempeño del gobierno de Cristina Kirchner. Si bien me inclino en parte por esta última interpretación, creo que no alcanza para comprender qué pasó en Argentina a fines de 2015. Aclaremos un poco las cosas.

En primer lugar, hay que recordar que el presidente Mauricio Macri llegó al poder por un margen de escasos tres puntos porcentuales respecto del candidato kirchnerista. Es decir, una diferencia exigua, si bien suficiente para marcar el apoyo a un cambio de rumbo. También, que esa aparente polarización electoral (una sociedad divide en dos mitades) no fue más que una consecuencia mecánica del balotaje (la segunda vuelta electoral), sumada a la conciencia de que había demasiado en juego como para votar en blanco. El resultado de la primera vuelta, en cambio, dio cuenta de una sociedad divide aproximadamente en tres tercios: uno oficialista, otro opo-

sitor y un tercero que rescataba algunas políticas de la década pasada, pero mayoritariamente “antikirchnerista” en términos actitudinales. Esa distribución en poco se ha alterado al día de hoy.

En tercer lugar, y más importante aún, Mauricio Macri le dio cierto contenido a la noción de cambio durante la campaña electoral, que era el que el electorado estaba mayoritariamente dispuesto a apoyar. Se trataba de una oferta de cambio que garan-

Macri no ganó con un programa de derecha clásica: otra cosa es cómo lo aplica y su resultado

tizaba la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se comprometía a no privatizar las empresas reestatizadas por los Kirchner y a mantener el régimen de jubilaciones y pensiones en manos del estado. También, que tenía como prioridades la “pobreza cero” y la inclusión social. Es decir, el programa de gobierno que mostró

Macri ante la sociedad no puede calificarse como de derecha clásica, sino más bien como pragmático, capaz de adaptarse a una sociedad civil, política y culturalmente distinta a la de décadas atrás. En otras palabras, el cambio propuesto por el candidato Macri no hablaba de menos estado, sino de “mejor estado”, sin corrupción, y sin mediaciones políticas que perpetuasen el clientelismo.

¿Qué cambió en Argentina desde la asunción del nuevo gobierno? Por un lado, el recambio de los gestores públicos incorporando, al frente de ministerios y empresas públicas, a hombres y –en muy menor medida– mujeres que trabajaban como altos ejecutivos en el sector privado. En ese sentido, para el nuevo gobierno “mejor estado” significa menos política.

Por otro lado, en cuanto a la política social, la AUH (el programa de mayor envergadura) amplió la cantidad de beneficiarios y el monto a percibir. Sin embargo, las estadísticas públicas (y también las privadas) denunciaron el incremento de la pobreza en un 3 por ciento respecto a la administración anterior –llegando a un 32 por ciento de la población–. Finalmente, la promesa de luchar contra la corrupción pronto chocó contra la evidente vinculación del presidente con los casos de los Papeles de Panamá y del Correo Argentino.

La novedad en política económica pasa por la decisión de priorizar el sector primario (suprimiendo los aranceles a la exportación de bienes agropecuarios y las retenciones a la minería), abrir más la economía y reducir el déficit fiscal. Así las cosas se está implementando –como suele ocurrir a menudo– una agenda que se mantuvo oculta durante la campaña electoral. Sin embargo alguna coherencia se ha mantenido con respecto a la campaña electoral, ya que hasta hoy no se han implementado políticas contundentes de apoyo a la producción industrial, y se insiste en cambio en la voluntad de atraer inversiones extranjeras, que por ahora no llegan.

Finalmente, cabe decir que el actual gobierno también mantiene la retórica individualista desplegada en su campaña –algo que a veces pasa desapercibido al ciudadano de a pie–. El presidente Macri parece no cansarse de hablar del progreso individual como un fruto del propio esfuerzo, y de su propósito de acompañar a los argentinos en el logro de la felicidad personal. Algo que deja en claro la ideología liberal en la que funda su acción política. ▀

